



## INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS (30 PLAZAS EN 3 LOTES) POR CONTINGENCIA MIGRATORIA” A ADJUDICAR POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), la necesidad de celebración de este contrato se justifica atendiendo a las siguientes consideraciones.

En primer lugar, el presente contrato se rige por la siguiente normativa que justifica la competencia que ejerce este centro directivo para el cumplimiento del objeto del contrato:

- La Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, así como la Ley 6/1995, de Garantías de los Derechos de la Infancia y Adolescencia en la Comunidad de Madrid destacan como principio rector de toda actuación de los poderes públicos, **la supremacía del interés del menor**. Asimismo, establece los principios rectores de la acción de las Administraciones Públicas en materia de infancia, y exige a las Entidades Públicas competentes la adecuada regulación, autorización, inspección y supervisión de las instituciones que acojan menores de edad.

En el caso de la Comunidad de Madrid, dichas funciones se atribuyen a la Consejería de Integración Social (en la actualidad Consejería de Familia, Juventud y Política Social) mediante Decreto 49/88, del Consejo de Gobierno de dicha Comunidad.

En concreto, le corresponde a la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, en su condición de entidad pública de protección, la labor de velar por los menores, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral” (art.154 del Código Civil). Es decir, como “Pater Familias” debe asegurar la cobertura de las necesidades de la persona menor de edad y su plena satisfacción moral y material, en un contexto que garantice sus derechos, favorezca la asunción de sus obligaciones y las condiciones adecuadas para su desarrollo, socialización e integración y adaptación psicosocial, lo que incluye necesariamente la búsqueda de recursos sociosanitarios para su recuperación, por lo que si no se le proporciona el tratamiento necesario para salvaguardar, en primer lugar, su vida y garantizar su integridad física y seguridad, se estaría haciendo dejación de funciones e incluso se incurriría en ilícito penal. Además, el interés superior del menor está vigilado por la Fiscalía de Menores, por el Defensor del Pueblo y supervisado por el Juez correspondiente.

- La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, tiene como objeto introducir los cambios necesarios en la legislación española de protección a la infancia y la adolescencia, que permitan continuar garantizando a los menores una protección uniforme en todo el territorio nacional, introduciendo una mejora en los instrumentos de protección jurídica, en aras del cumplimiento efectivo del artículo 39 de la Constitución Española, que establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y, en especial, de los menores de edad. En concreto, en su artículo primero, apartado cinco, establece que los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones que los menores españoles. De igual forma, establece que las Administraciones Públicas velarán por los grupos especialmente vulnerables, entre los que se encuentran los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.



Por su parte, el artículo primero, apartado nueve, se refiere a los supuestos de “Atención Inmediata” estableciendo que “las autoridades y servicios públicos tendrán la obligación de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su ámbito de competencias o de dar traslado en otro caso, al órgano competente y de poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor o, cuando sea necesario, de la Entidad Pública y del Ministerio Fiscal.

Hemos de tener en cuenta, por tanto, que, atendiendo a la legislación internacional y nacional, no existe la posibilidad de establecer listas de espera para este perfil concreto de población, debiéndose garantizar su atención inmediata.

- La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de Julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, desarrolla y refuerza el derecho del menor a que su interés superior sea prioritario, dotando de contenido al citado concepto. Asimismo, modifica el apartado 2 del art. 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
- La **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia**, cuyo objeto es garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida.
- La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que establece en su artículo 35 el régimen aplicable a los menores no acompañados.

Es relevante destacar el Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, que viene a dar seguridad relativa a la documentación administrativa de los menores tutelados en España por una Administración Pública o, en virtud de resolución judicial, por cualquier entidad, considerándose su estancia regular.

La normativa anterior a la reforma no se ajustaba a las particularidades del colectivo, así como a los programas educativos o de inclusión sociolaboral que instituciones públicas y privadas dirigían a estos jóvenes, con el fin de acompañarlos hacia su transición a la mayoría de edad y a una vida independiente. Por tanto, esta reforma se plantea en torno a nueve elementos que tienen por finalidad suprimir los obstáculos que impiden la documentación del menor extranjero no acompañado tutelado por una entidad pública y diseñar un régimen propio de residencia para éstos en el momento en el que acceden a la mayoría de edad, distinto al régimen de residencia no lucrativa, que se prevé para otros fines alejados de la situación de estos jóvenes. En este nuevo régimen, se tendrá en cuenta su participación en programas desarrollados por instituciones públicas o privadas y que promueva un correcto desarrollo personal y su mejor inclusión en la sociedad.

- El Real Decreto 557/2001, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, en cuyo título XI, capítulo III, desarrolla los requisitos, procedimientos y criterios de aplicación respecto al tratamiento de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.



- La Resolución, de 13 de octubre de 2014, de la Subsecretaría de la Presidencia, por la que se publica el Acuerdo para la aprobación del Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, tiene como objeto coordinar la intervención de todas las instituciones y administraciones afectadas, desde la localización del menor hasta su identificación, determinación de su edad, puesta a disposición del Servicio Público de protección de menores y documentación.
- Por su parte, el Estatuto de las Residencias de Atención a la Infancia y la Adolescencia, aprobado por Decreto 88/1998, de 21 de mayo, exige a estas Residencias el desarrollo de las funciones de educación y cuidado y promoción de la salud de los residentes (artículo 5), debiendo programar y desarrollar la vida cotidiana del Centro, diseñar, realizar y evaluar periódicamente el Proyecto Individual de cada menor, dar a los cuidados y atenciones a las necesidades básicas de los niños un profundo sentido educativo y afectivo (artículo 6) y facilitar la reincorporación familiar del menor o, en los casos en ésta resulte imposible, promover la alternativa familiar más adecuada.

El objeto del presente contrato consiste en establecer las condiciones para la atención residencial de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados (NNAMNA) con motivo de la contingencia migratoria, que serán trasladados desde el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias a la Comunidad de Madrid, de acuerdo al con el Plan de Respuesta aprobado por Acuerdo de la Conferencia Sectorial de la Infancia y la Adolescencia, dividido en 3 lotes. **Todo ello, dentro del entorno seguro, inclusivo y de buen trato al que hace referencia la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (en adelante, LOPIVI).**

En el Pliego de Prescripciones Técnicas se contempla el detalle de todas las prestaciones que conlleva, por lo que **el objeto es completo y se relaciona directamente tanto con las competencias a ejercer por la Comunidad de Madrid como por las necesidades sociales a cubrir.**

El incremento de la llegada de niños, niñas y adolescentes migrantes sin referente familiar que son acogidos por las Entidades Públicas de Protección a la Infancia de las Comunidades Autónomas, desborda, con frecuencia, la capacidad de acogida y atención a la infancia en situación de vulnerabilidad de estos territorios y multiplica las dificultades para que el sistema de protección a la infancia pueda ofrecer una respuesta adecuada y coordinada basada en el interés superior del menor.

El artículo 2 de la Constitución Española establece el principio de solidaridad interterritorial. De acuerdo al título III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regirán las relaciones interadministrativas los principios de colaboración, cooperación y eficiencia en la gestión.

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, se configura como órgano de cooperación entre las administraciones públicas en materia de protección a la infancia y adolescencia.

El Pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrado el día 30 de septiembre de 2022 y conforme al artículo 11.1 letra f) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, aprobó y dio conformidad al "Modelo de gestión de contingencias migratorias para la infancia y adolescencia no acompañada".



En el mismo Pleno se aprobó y dio conformidad, al "Plan de respuesta ante crisis migratoria para menores migrantes 2022-2023 y a la propuesta de distribución territorial de la segunda parte del crédito presupuestario de 20 millones de euros destinado a la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados"

El resultado final de este Plan de Respuesta es que durante el año 2022 y el 2023 se deben derivar 30 NNAMNA desde la Comunidad Autónoma de Canarias a la Comunidad de Madrid, por lo que se hace necesaria la aprobación del presente contrato, para poder acoger de forma estable a estos 30 menores en unidades convivenciales de 10 menores y que no estén separados en diferentes recursos.

Actualmente, hay **274 plazas** para estos menores, distribuidas en las siguientes tipologías de recursos:

- ✓ 1 Centro de Primera Acogida (Casa de Campo – 50 plazas).
- ✓ 15 pisos tutelados (161 plazas).
- ✓ 1 Centro de Adaptación Cultural y Social - CACYS Manzanares (32 plazas).
- ✓ 1 Centro para víctimas de trata (5 plazas).
- ✓ 1 Centro para menores con dificultades de adaptación sociocultural (26 plazas).

Todo ello, sin perjuicio de que puedan derivarse menores a cualquier recurso del Sistema General de Protección, que alcanza un total de **1.807 plazas**, incluyéndose las anteriores.

Con esta disponibilidad de plazas, se puede atender en un año, un flujo migratorio de menores migrantes que oscile entre 400 y 1.100 menores, dependiendo de los periodos de estancia, que siempre son variables e inciertos.

Aunque la Comunidad de Madrid, es frecuentemente una **comunidad de tránsito**, ya que muchos de estos menores no concluyen su proyecto migratorio aquí, sino que se dirigen a otros territorios de la península (fundamentalmente, Cataluña y País Vasco) para ir a Francia, Bélgica y Alemania, para reencontrarse con sus familias, el número de "nuevas llegadas de menores" da indicios de la evolución de la cifra que se puede llegar a recibir durante este año y los que vienen, dato valioso para gestionar de forma eficiente las plazas disponibles.

La evolución de llegadas y atención a menores en los últimos años ha sido la siguiente:

- En el año 2018 llegaron por primera vez a Madrid 1.376 menores (114 de media al mes)
- En el año 2019 llegaron por primera vez a Madrid 749 menores ... (62 de media al mes)
- En el año 2020 llegaron por primera vez a Madrid 296 menores ... (24 de media al mes)
- En el año 2021 llegaron por primera vez a Madrid 571 menores ... (47 de media al mes)
- En el año 2022 llegaron por primera vez a Madrid 2.225 menores... (185 de media al mes)

Aunque los flujos migratorios de menores migrantes son siempre inciertos y variables, parece cumplirse hasta la fecha, que el segundo semestre, suele soportar una mayor afluencia migratoria.

En el año 2018 se asumieron 270 nuevas medidas de Protección (Tutelas)

En el año 2019 se asumieron 338 nuevas medidas de Protección (Tutelas)

En el año 2020 se asumieron 149 nuevas medidas de Protección (Tutelas)

En el año 2021 se asumieron 198 nuevas medidas de Protección (Tutelas)

En el año 2022 se asumieron 273 nuevas medidas de Protección (Tutelas)

Además, junto a ello, se han adoptado 40 guardas Provisionales (UCRANIA) y otras tantas Guardas en Atención Inmediata para los menores migrantes que no se contabilizan, dado que posteriormente se transforman en Tutela.

Teniendo en cuenta los datos de ocupación y que la situación sanitaria y administrativa con Marruecos (cierre de fronteras) se ha normalizado, la tendencia es que cada vez lleguen a nuestra Comunidad Autónoma más menores migrantes del Magreb y del África subsahariana, por ello, **será necesario disponer de plazas adicionales a las ya existentes, aparte de las necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones de la Conferencia Sectorial.**

A fecha de hoy, se mantiene la proporción de NNAMNAs en recursos especializados, así, de cada 4 menores migrantes, 3 residen en recursos especializados.

En el mes de enero del 2023 se ha firmado el Protocolo de actuación para el traslado de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados entre la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y la Administración pública de la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, en situaciones de contingencia migratoria, a fin de organizar los traslados de menores desde Canarias a Madrid y para ello, la Comunidad de Madrid debe disponer de plazas suficientes.

Esto conlleva que, a pesar de las plazas creadas, el sistema se puede llegar a tensionar rozando el 100 % de ocupación, por lo que quedarían plazas vacantes puntuales, **pero no pisos con su capacidad completa para acoger a menores procedentes de Canarias y Ceuta** y lo adecuado es que estos menores se queden juntos en los mismos recursos.

Por todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la LCSP, se propone la tramitación de un contrato de servicios, al haberse atribuido a la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad la competencia sobre estos servicios.

En Madrid, a la fecha de la firma

LA DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Firmado digitalmente por: VALMAÑA OCHAITA SILVIA  
Fecha: 2023.03.03 10:48

Fdo.: Silvia Valmaña Ochaíta